

En Coyhaique, a catorce de abril del año dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

En lo principal de la presentación de fecha 29 de diciembre del año 2022, Irma Aleida Bahamonde Cortez, asistente social, con domicilio en Carretera Austral s/n, Villa Amengual, comuna de Lago Verde, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, representada legalmente por don Nelson Fredy Opazo López, o por quien debidamente le subroque o reemplace en el cargo, ambos con domicilio en calle Cacique Blanco N° 131, comuna de Lago Verde, Región de Aysén, en virtud del acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no renovar su contrato de prestación de servicios para el año 2023, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 5548 de fecha 29 de noviembre de 2022; solicitando: “a) *Que, se deje sin efecto el Ordinario Reservado N° 613, de fecha 25 de noviembre de 2022, que dispuso la NO renovación de mi contrata para toda la anualidad del año 2023, por ser un acto arbitrario e ilegal; b) Que, se deje sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga otorgar validez o reconocimiento del acto arbitrario que dispuso la No Renovación de mi Contrata por toda la anualidad del año 2023; c) Que, se me reconozca mi legítimo derecho a que se me renueve o prorrogue mi Contrata, profesional, Grado 12° de la Escala Municipal de Sueldos, como delegada municipal en la localidad de Villa Amengual, por toda la anualidad del año 2023; d) Que, se decreten las demás medidas que esta Iltrma. Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección invoco en la presente Acción de Protección; e) Que, tengo derecho a las remuneraciones que se devenguen a partir del día 01 de enero de 2023 y mientras no haya sentencia firme y ejecutoriada que ponga término a la presente acción*

MDCOXEMGRJT

*judicial y f) Que, se condene en costas a la Recurrida en caso de oposición.” (SIC)*

Con fecha 03 de enero de 2023, se declara admisible el recurso de protección y se pide informe a la recurrida.

Con fecha 18 de enero de 2023, se agregó el informe evacuado por la recurrida, la que solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 31 de marzo de 2023, se ordenó traer los autos en relación y con fecha 10 de abril del mismo año, se procedió a la vista de la causa, concurriendo a alegar por la recurrente el abogado don Marcelo Rodríguez Avilés; y el abogado don Fabián Rojas Muñoz, por la recurrida, solicitando el rechazo con costas, conforme a los fundamentos contenidos en el respectivo informe evacuado. Quedando ésta en acuerdo.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, la recurrente funda su recurso, señalando como antecedente previo, que ingresó a prestar servicios como Delegada Municipal de Villa Amengual, en calidad de prestadora de servicios a honorarios para la Ilustre Municipalidad de Lago Verde durante el año 2012, hasta el año 2017, agregando que desde el año 2018 a la fecha se desempeñó bajo contrata por 22 horas. Su contratación fue renovada año a año para cumplir las mismas funciones a contar del mes de diciembre de 2012 y con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022.

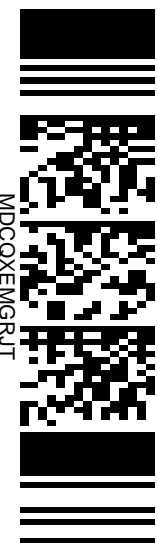
Sostiene que, en el mes de enero de 2022, el Sr. Secretario Municipal de la Municipalidad de Lago Verde le notifica de un decreto en el que se ponía término a sus servicios desde ese año, por lo cual concurrió ante la Contraloría General de Aysén, la que se pronunció mediante Dictamen, acogiendo parcialmente su reclamo en el sentido de que en virtud del principio de confianza legítima y no habiendo



notificado con la debida anterioridad, se concluyó que no se ajustó a derecho, resolviendo que debía renovarse la contrata por todo el año 2022.

Argumenta que, fue notificada con fecha 29 de noviembre de 2022 por medio de carta certificada de fecha 25 de noviembre de 2022 del Ordinario Reservado N°613, que comunica la decisión de no renovar su contratación para el año 2023, esgrimiendo los siguientes argumentos: su reincorporación para el año 2022 se debió a una decisión de la Contraloría Regional de Aysén, circunstancia que estiman no puede generar la confianza legítima, toda vez que se habría forzado su contratación, no necesitando sus servicios; que la recurrente posee un trabajo de media jornada la cual no cubre todas las necesidades de la unidad, lo que significó una nueva contratación para suplir las necesidades; que sus evaluaciones cuatrimestrales del año 2022, representan un desempeño deficiente y no ajustados a los lineamientos y objetivos planteados para su estamento; y por último, señala como fundamento que en atención a la reestructuración del trabajo de la administración municipal, su perfil no se ajusta a los nuevos requerimientos, no existiendo funciones asignadas para la recurrente.

Indica la recurrente que los fundamentos antes expuestos carecen de sentido, por cuanto la Contraloría sostuvo que la renovación por todo el año 2022 debía realizarse en virtud de su interpretación vigente, esto es, la confianza legítima de la renovación. Agrega que en razón del segundo argumento sostenido por la recurrida, es sabido por ésta que se desempeñó cumpliendo horarios de 44 horas semanales y se le remuneraba sólo por 22, y que por decisión del Contralor se dispuso que no corresponde remunerar en exceso de lo trabajado. Por último, conforme el tercer argumento sostenido por la recurrida, concluye que es un evidente caso de decisión subjetiva donde se buscan excusas



para fundar una decisión carente de sustento, ya que las evaluaciones son un proceso reglado y anual que garantiza el derecho del funcionario a cuestionar una decisión sin fundamento, sosteniendo que siempre fue calificada con nota sobresaliente, sólo el año 2022 lo fue en lista 2, pero jamás con nota deficiente como pretende hacer creer el empleador.

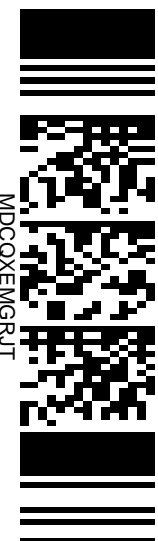
Expone que en razón del artículo 41 inciso cuarto de la Ley 19.880, las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada, que en su situación particular, no se justificó la decisión de no renovar su contrata como en derecho correspondía, toda vez que, sostener como fundamento un período anterior resulta del todo ineficaz, debiendo fundarse en una decisión actual y en hechos objetivos.

Para fundar su acción cita diversa jurisprudencia, relativa a la materia de autos.

Indica que, la decisión de no renovar su contrata es arbitrario, pues resulta evidente la inexistencia de un fundamento racional, no se respeta la garantía de la fundamentación o motivación del acto administrativo, en ese sentido el hecho de no fundamentar las decisiones administrativas también es contrario al principio de confianza legítima con que cuentan los órganos de la Administración del Estado.

Agrega que, igualmente se ha vulnerado lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, siendo necesario que el acto que se dicte contenga los fundamentos de hecho y derecho que considera para su decisión, además del razonamiento que lo motiva.

En cuanto a las garantías que la recurrente estima vulneradas, sostiene que se infringe el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, desde que el Ordinario Reservado impugnado, no se basta a sí mismo para justificar su dictación, tampoco para entender racionalmente porque dicha decisión debe afectarle y no a otro funcionario, más si los

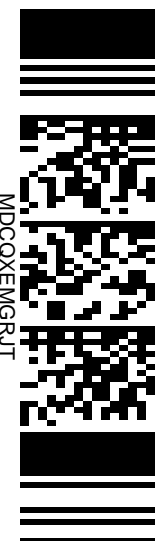


argumentos son inexistentes o falsos, lo que provoca un daño y perjuicio.

Expuso que, asimismo, se vulnera el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, toda vez que estima tenía un derecho a mantenerse como delegada municipal para el período 2023, siendo vulnerada en su derecho de propiedad sobre el cargo y su estabilidad en el empleo.

**SEGUNDO:** Que, la recurrida, informando el recurso de protección, solicita que este sea rechazado, desde que existió un término de contrato carente de fundamentación racional o causal de mérito, por tanto, en cuanto a la supuesta arbitrariedad alegada, en el Ordinario Reservado N°613-2022, se consignó claramente los fundamentos legales, los que son:

1. Servicios innecesarios para el quehacer, toda vez que el desempleo de funciones de la recurrente durante el año 2022 se debió a la reincorporación por decisión administrativa de la Contraloría Regional de Aysén, circunstancia que estiman no puede generar la confianza legítima de su renovación para el año 2023.
2. La Municipalidad en su rol de organismo público tiene la obligación e imperativo legal de regirse por los principios de eficiencia y eficacia del gasto público, específicamente en materia de personal, por tanto en razón del Dictamen E173171-2022 que dispone que las entidades edilicias deberán generar nuevas condiciones presupuestarias para dar cumplimiento al nuevo régimen contractual de los contratados a honorarios, de forma que ante los insuficientes recursos que cuenta el municipio se hace necesario disminuir la cantidad de funcionarios.



3. La recurrente no prestaba funciones a tiempo completo, esto es, 44 horas semanales, lo que se traducía en deficiente gestión y cumplimiento de las obligaciones funcionarias, debiendo contar con otro funcionario para suplir la deficiente gestión y cumplimiento que se le exigía.
4. Las evaluaciones cuatrimestrales de la recurrente para el año 2022 representaron un desempeño deficiente, que no se ajustaba a los lineamientos y objetivos planteados, razón fundada para establecer la terminación de una contrata con calificativo de confianza legítima.
5. Reestructuración de las Unidades Municipales, la no renovación también se debería a este factor que experimentarán las municipalidades, entre ellas, la Administración Municipal, dicha reestructuración se vendría desarrollando desde el año 2021, la cual señala sería de conocimiento de la recurrente.

Por otra parte, en cuanto a la supuesta ilegalidad alegada por la recurrente en razón a que se infringió la obligación de motivación de los actos administrativos, dando al efecto por reproducidos sus dichos en sentido de que la decisión de la Municipalidad fue fundada y que las razones fueron debidamente consignadas con claridad y orden, de tal manera que el Ordinario Reservado 613-2022, fue emitido con fecha 25 de noviembre de 2022, un mes de antelación a la fecha de terminación de la contrata, siendo debidamente notificada a la recurrente de forma personal por el Ministro de Fe, con fecha 29 de noviembre de 2022.

Indica que tal como lo expresa la Ley 18.883 los empleos a contrata durarán como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados cesarán en sus funciones en esa fecha. En razón de ello, la norma autoriza que la Municipalidad solo puede contratar a

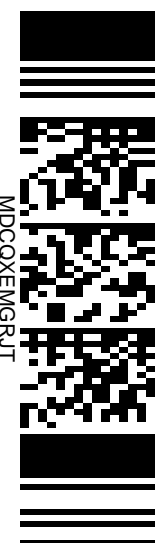


funcionarios a un plazo determinado que no exceda de un año calendario, cuya duración debe alcanzar como máximo el 31 de diciembre de cada año y de no mediar renovación el personal cesará en sus funciones por el solo ministerio de la ley, por lo tanto, la norma no obliga en absoluto a la Municipalidad a prorrogar las contrataciones de los funcionarios, disponer su no renovación de ninguna forma constituye un acto ilegal.

En cuanto a la confianza legítima, estima que no se puede considerar vulnerado éste principio, ya que el Nuevo Instructivo de la Confianza Legítima en las Contratas, emitido por la Contraloría General de la República de fecha 17 de noviembre de 2022, señala en el sexto párrafo del número 6) letra VI: *“De este modo y en concordancia con los dictámenes N° 12.248 Y 18.901, años de 2017, y de este Órgano de Control, podrán servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, entre otros: (...) Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal.”*

Finalmente expuso que, la recurrente no ha acreditado que la supuesta vulneración afecte derechos indubitados suyos, ya que la discusión debe centrarse en la existencia de la infracción a las garantías fundamentales, no sobre la existencia del derecho infringido.

**TERCERO:** Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°,

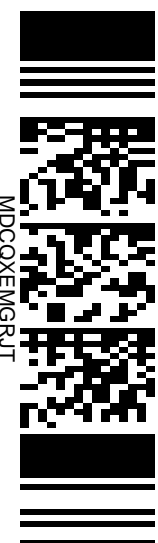


21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

**CUARTO:** Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excm. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

**QUINTO:** Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

**SEXTO:** Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el Ordinario Reservado N°613, de fecha 25 de noviembre del año 2022, y notificado personalmente con fecha 29 del mismo mes y año, mediante el cual se comunica la decisión de no renovar su contrata para el periodo 2023, el cual se encontraba vigente hasta el 31 de Diciembre del año 2022, pese a encontrarse amparada por el principio de confianza legítima; afectando con ello las garantías contempladas en





el artículo 19, números 2 y 24, de la Constitución Política de la República.

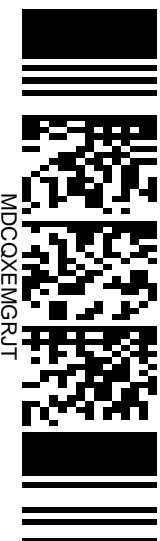
**SÉPTIMO:** Que, de los antecedentes que obran en estos autos, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer, básicamente, los siguientes hechos:

1. Por Decreto Alcaldicio N°030 de 11 de enero de 2018, de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, ingresó a prestar servicios a partir de 02 de enero de 2018, mediante modalidad a contrata, a la Municipalidad Villa Amengual, hasta el periodo de 31 de diciembre de 2018, quien debía realizar labores dentro de una jornada de 22 horas semanales.
2. Mediante Decreto Alcaldicio N°009, con fecha 03 de enero de 2019, se renueva su contratación para el período 2019, con duración hasta el 31 de diciembre de 2021, bajo la misma jornada laboral de 22 horas semanales.
3. Por Decreto Alcaldicio N°008, de fecha 03 de enero de 2020, se renueva su contratación para el período 2020, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, quien debe realizar labores bajo la misma jornada.
4. Mediante Decreto Alcaldicio N° 002 de fecha 04 de enero de 2021, se renueva su contratación para el período 2021, el cual se encuentra vigente hasta el día 31 de diciembre de 2021, quien debe realizar labores bajo la misma jornada.
5. Mediante Decreto Alcaldicio N° 14 de 2022, se dispone la renovación de la contrata hasta el día 25 de enero de 2022.
6. Mediante Decreto Alcaldicio N° 118 de 2022, se renueva su contrata, hasta que la recurrente se reintegre a sus funciones, considerando que a la fecha de su emisión se encontraba haciendo uso de licencia médica.
7. Mediante Dictamen N° E195999 de 21 de marzo de 2022, emitido



por la Contraloría General de la República, estima que conforme a los registros que mantiene el Órgano Fiscalizador, la recurrente generó una legítima expectativa de que su relación laboral sea renovada por la Municipalidad, para el año 2022, disponiendo que los Decretos N° 14 y 118 de 2022, no fueron dictados y notificados conforme lo instruido, por lo que no se ajustaron a derecho, correspondiéndole a la Municipalidad de Lago Verde, disponer la renovación del vínculo para todo el año 2022, en los mismo términos de su designación para el año 2021.

8. Mediante Ordinario Reservado N° 613, de fecha 25 de noviembre de 2022, el señor Alcalde de la Municipalidad de Lago Verde, don Nelson Opazo López, comunica a la recurrente la decisión de no renovar para el período 2023 su contratación, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, fundando, su decisión, en particular en los siguientes términos: que sus servicios no eran necesarios para el quehacer municipal del año 2022, su reincorporación fue consecuencia de una decisión administrativa de la Contraloría Regional de Aysén, circunstancia que estiman no puede generar la confianza legítima de su renovación para el año 2023; la Municipalidad en su rol de organismo público tiene la obligación e imperativo legal de regirse por los principios de eficiencia y eficacia del gasto público, específicamente en materia de personal, por tanto en razón del Dictamen E173171-2022 que dispone que las entidades edilicias deberán generar nuevas condiciones presupuestarias para dar cumplimiento al nuevo régimen contractual de los contratados a honorarios, ante los insuficientes recursos que cuenta el municipio se hace necesario disminuir la cantidad de funcionarios; la recurrente no prestaba funciones a tiempo completo, esto es, 44 horas semanales, lo que se traducía en deficiente gestión y cumplimiento de las obligaciones funcionarias, debiendo contar con otro funcionario para suplir la deficiente gestión y cumplimiento que se le exigía; las

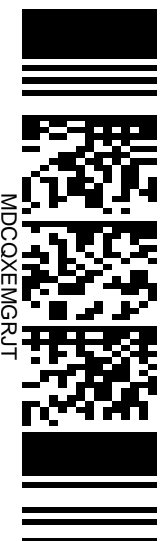


evaluaciones cuatrimestrales de la recurrente para el año 2022 representaron un desempeño deficiente, que no se ajustaba a los lineamientos y objetivos planteados, razón fundada para establecer la terminación de una contrata con calificativo de confianza legítima; reestructuración de las Unidades Municipales, la no renovación también se debería a este factor que experimentarán las municipalidades, entre ellas, la Administración Municipal, dicha reestructuración se vendría desarrollando desde el año 2021, la cual señala sería de conocimiento de la recurrente.

**OCTAVO:** Que, igualmente, se debe tener presente la normativa atinente, a saber:

Conforme lo dispuesto por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, regulado en la Ley N°18.883, el cual dispone que la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios, a cuyo respecto el artículo 2 de la misma Ley, dispone que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.

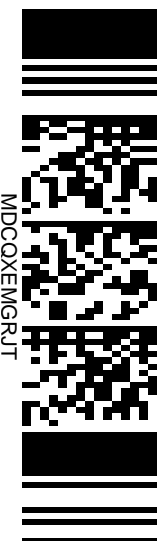
**NOVENO:** Que, en consecuencia, dilucidado lo anterior, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, habiéndose seguido, en su tramitación, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.



**DÉCIMO:** Que, sin embargo, la controversia se reduce a la fundamentación del acto administrativo de desvinculación, dado que la recurrente sostiene que carece de una debida motivación y justificación, por cuanto no contiene argumento alguno que permita una debida inteligencia del proceder del Municipio; lo que hace que la decisión de poner término a su contratación, deba necesariamente ser dejada sin efecto; alegación ésta que es contradicha por la recurrida.

**UNDÉCIMO:** Que, efectivamente, la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de asentar un criterio unificador, ha establecido que, el principio de confianza legítima opera después de cinco años, plazo éste que se estima prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona. Todo ello viene a ser coherente con la política de renovación de contratas del personal del Poder Judicial, siendo un criterio sistemáticamente aplicado al interior de este poder del Estado, teniendo sustento en el Acta 19-2012, refundida por el Acta 191-2019, que establece una renovación automática de la designación de los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo. (CS. Sentencia 31 de marzo de 2023, recurso de protección 26.279-2023)

**DUODÉCIMO:** Que asentado el primer aspecto, tal como se consignó en el motivo Séptimo, es un hecho de la causa que, la recurrente prestó servicios en la Municipalidad de Lago Verde desde el día 01 de enero de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2022, sumando un total de cinco años, generando una expectativa legítima de que será prorrogada o renovada, de modo que, el vínculo que surge entre las partes se torna indefinido por la confianza legítima que surge



del tiempo transcurrido.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, dilucidada la procedencia de la confianza legítima de la cual es acreedora la recurrente, es preciso señalar lo siguiente:

La Excma. Corte Suprema ha sostenido que conforme al funcionario que se desempeña en la Administración y se encuentra protegido por el principio de confianza legítima, sólo podrá ponerse término a dicha relación estatutaria por medio de sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, conforme al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales N° 18.883, el que establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios, aplicable a quienes sirvan cargos en calidad de planta o a contrata, establece en su artículo 48 lo siguiente: *“El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 o por dos años consecutivos en lista 3, deberá retirarse de la Municipalidad dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación. Si así no lo hiciere se le declarará vacante el empleo a contar desde el día siguiente a esa fecha. Se entenderá que la resolución queda ejecutoriada desde que venza el plazo para reclamar o desde que sea notificada la resolución de la Contraloría General de la República que falla el reclamo.*

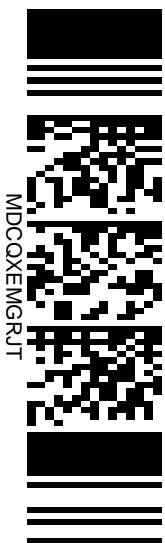
*Si un funcionario conserva la calificación en lista 3, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, no se aplicará lo establecido en el inciso precedente, a menos que la falta de calificación se produzca en dos períodos consecutivos.”*

**DÉCIMO CUARTO:** Que, la resolución administrativa impugnada, esto es, Ordinario Reservado N°613, de fecha 25 de Noviembre del año 2022, de la Municipalidad de Lago Verde, fundamenta la no renovación de la contrata, en consideración a que: no se encontraría protegida por



el principio de confianza legítima, por cuanto su renovación para el período 2022 se debió únicamente a una decisión Administrativa de la Contraloría General de la República; que en atención a dar cumplimiento con el Dictamen E173171-2022 debiendo generar nuevas condiciones presupuestarias para el nuevo régimen contractual de los contratados a honorarios, ante sus insuficientes recursos se hace necesario disminuir la cantidad de funcionarios que cuenta el municipio se hace necesario disminuir la cantidad de funcionarios; que conforme a las evaluaciones cuatrimestrales la recurrente habría presentado durante el año 2022 un desempeño deficiente, que no se ajustaba a los lineamientos y objetivos planteados, razón fundada para establecer la terminación de una contrata con calificativo de confianza legítima.

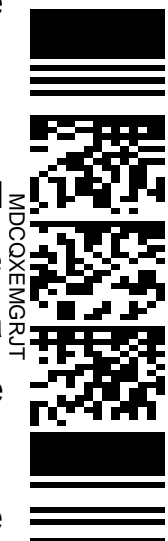
**DÉCIMO QUINTO:** Que, en las condiciones descritas el acto impugnado carece del estándar de fundamentación establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, desde que: 1) doña Irma Bahamondes Cortez, se ha desempeñado en funciones propias de contrata por cinco años, generándose una expectativa legítima de que será prorrogada o renovada, conforme lo razonado por nuestra Corte Suprema en atención a encontrarse protegida por el principio de confianza legítima; 2) que como fundamento sostener que el municipio presenta un déficit económico que lo conmina a prescindir de sus servicios, con el objeto de dar cumplimiento a lo dictaminado por la Contraloría General de la República, es del todo infundado, por cuanto sus dichos no se basan en razones objetivas y acreditadas, no aportando antecedentes que le permitan a este Tribunal de Alzada, formar la convicción de que exista en la realidad un déficit en las arcas municipales y que a mayor abundamiento, no ha aportado antecedentes que respalden el por qué se decide poner término a la contrata de la recurrente y no de otro funcionario; 3) en cuanto a la



calificación, sostiene que la recurrente tuvo un desempeño deficiente razón fundada para establecer la terminación de una contrata con calificativo de confianza legítima, en esta situación, la recurrida no acompañó antecedentes, calificaciones o similares que permitan fundar su alegación, es más, el Estatuto Administrativo que regula las Municipalidades es claro en establecer un procedimiento para calificaciones, y su consecutivo despido de la Administración, no encontrándonos en dicho escenario, por cuanto la recurrente presentó los antecedentes que demuestran como su empleador la habría calificado durante el período septiembre 2021 al mes de agosto de 2022, con nota 5, correspondiente a la Lista 2, equivalente a un desempeño “Bueno”,

**DÉCIMO SEXTO:** Que, en consecuencia, la resolución administrativa impugnada mediante esta acción de protección, surge del todo ilegal, desde que al ser infundada, infringe los artículos 11 y 41, ambos de la Ley 19.880; como asimismo aparece arbitraria, desde que se esgrime una supuesta realidad presupuestaria y financiera, tanto actual como la proyectada para el año 2023, que torna financieramente inviable renovar el cargo del prestador de servicios en modalidad a contrata, de igual forma se funda en un desempeño deficiente sin que por su parte se incluyan en el acto que pone término a la contrata, antecedentes comprobables que justifiquen tal situación.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, la actuación de la recurrida infringe el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, al ser discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados, que desempeñándose en cargos a contrata, permanecen en ellos, observándose en la resolución impugnada, que sólo la recurrente aparece afectada, sin perjuicio de que el deber de motivación del acto

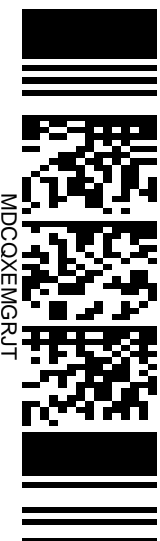


administrativo debe emplearse para todas las personas que se encuentren en la misma situación y en el presente caso ello no se cumple.

Igualmente se ha vulnerado el derecho de propiedad, estatuido en el artículo 19, N° 24, de la Carta Magna, desde que priva de manera ilegítima a la recurrente de las remuneraciones a las que tenía derecho a percibir durante su desempeño laboral.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, en consecuencia, habiendo incurrido por la recurrida en un acto arbitrario e ilegal que priva a la recurrente de las garantías constitucionales señaladas; y considerando la nueva jurisprudencia que en esta materia ha asentado la Excelentísima Corte Suprema se deberá acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, **SE ACOGE**, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Irma Bahamonde Cortez, en contra de la Municipalidad de Lago Verde, representada legalmente por su Alcalde, don Nelson Fredy Opazo López y en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario Administrativo N° 613 de fecha 25 de noviembre de 2022, mediante la cual la recurrida dispuso no renovar para el periodo 2023, su contrata; como asimismo se ordena el reintegro inmediato a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas durante el tiempo que la recurrente ha estado separado de su cargo hasta su efectiva reincorporación, debiendo la recurrida disponer la inmediata renovación de sus servicios por todo el año 2023, conforme a derecho.

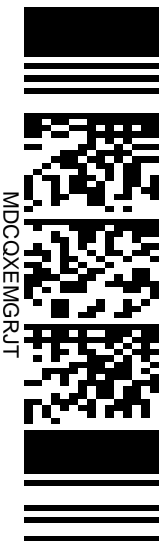




Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la señorita Abogado Integrante doña Paola Etelvina Aguilar Gallardo.

Rol N°2368-2022.- (Protección).-



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Jose Ignacio Mora T., Ministra Natalia Rencoret O. y Abogada Integrante Paola Etelvina Aguilar G. Coyhaique, catorce de abril de dos mil veintitrés.

En Coyhaique, a catorce de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

